

La participación política y social de los jóvenes en España está en una encrucijada. Por un lado, la desafección hacia la política, las instituciones y los procesos electorales es evidente; por otro, los jóvenes están redefiniendo su forma de interactuar con el sistema, explorando nuevas formas de participación y activismo.

Según diversos estudios, la juventud española tiene un menor interés por la política y por la participación pública en comparación con otras generaciones. Según los datos del INJUVE, en 2006 solo el 18 por ciento % de los jóvenes españoles declaraba tener mucho o bastante interés por la política. El porcentaje, históricamente bajo, ha ido aumentando en los últimos años hasta superar el 35 % en 2020¹. La Encuesta Social Europea confirma que se trata de una cuestión de edad, y extrapolable al resto de países de nuestro entorno. Así, el porcentaje de personas que declaran tener mucho o bastante interés en la política se incrementa con los años, pasando del 27 % (de 15 a 18 años) al 42 % entre los adultos de entre 30 y hasta 64 años².

El desinterés de los jóvenes por la actividad institucional lastra también que acudan a las urnas en cada ciclo electoral. Este patrón, consistente desde hace años, muestra en torno a un 10 % menos de participación entre las personas jóvenes (de 18 a 29 años) que entre las adultas, con excepciones puntuales como las elecciones generales de 2015, cuando la llegada de nuevos partidos provocó un descenso de la abstención juvenil al 5 %. En los comicios de 2019, los últimos con datos disponibles, la diferencia fue del 6,6 %, según el Informe *Juventud en España 2020*.

Uno de los principales factores que explican la baja participación de los jóvenes en las elecciones es su alejamiento de los partidos políticos tradicionales, percibidos a menudo como incapaces de responder a sus demandas. De hecho, según el macrosondeo “El Futuro es Ahora”, el 92 % de los jóvenes no se siente escuchado por las fuerzas políticas³. Las conclusiones de los estudios reflejan que el sistema de partidos no ha sabido adaptarse a las demandas de un grupo que vive en una era digital marcada por el acceso inmediato a la información y por una mayor conciencia de problemas globales, como el cambio climático o la igualdad de género.

Además, el contexto de crisis económica y sus graves efectos en la juventud (con una tasa de desempleo juvenil que supera el 25 % y una precariedad laboral crónica) ha exacerbado su sentimiento de frustración y desafección, al ver cómo sus expectativas de futuro son cada vez más inciertas. Todo ello ha generado una gran desconfianza hacia los gobiernos y la clase política en general, a la que culpan en gran medida por su incapacidad para aportar soluciones efectivas a sus problemas cotidianos. De hecho, el 92 % cree que la opinión de los jóvenes “les importa poco o nada” a los políticos, según el sondeo de “El Futuro es Ahora”.

Las redes sociales y las plataformas digitales han abierto un espacio donde los jóvenes se expresan

La desconfianza en las instituciones también ha sido reforzada por la corrupción política y la falta de transparencia. La percepción generalizada de que los políticos no cumplen sus promesas o actúan en su propio interés ha contribuido a que muchos jóvenes opten por no participar en los procesos electorales. A esto se suma el hecho de que parte de la juventud siente que votar no influye directamente en las decisiones políticas. Así, un 34 % de los jóvenes cree que su voto no es útil, según una reciente encuesta de las plataformas Poletika y Talento para el Futuro⁴; y esta percepción de ineficacia tiene un impacto directo en su movilización durante las elecciones.

Según la encuesta “¡Rompe el cristal!”, elaborada por el Consejo de la Juventud de España (CJE), el 59 % de los españoles de entre 14 y 30 años no se sienten representados en el sistema político español⁵. El último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también apunta en la misma dirección, indicando que

los jóvenes consideran la política como el principal problema del país⁶ pero, paradójicamente, no encuentran en ella un espacio para expresar sus inquietudes.

Todo ello es parte de un fenómeno más amplio de desafección institucional, que ha llevado a muchos jóvenes a alejarse de las formas tradicionales de participación democrática. Aunque esta tendencia no implica una falta de interés en los asuntos públicos, sino una reorientación hacia formas alternativas de participación, está derivando en ocasiones en una reducción en el apoyo a la democracia entre los jóvenes. Un 26 % de los varones de entre 18 y 26 años considera que “en algunas circunstancias”, el autoritarismo puede ser preferible al sistema democrático, según una encuesta de 40dB⁷.

Participación joven

El interés por la política es “una actitud básica e imprescindible para una ciudadanía activa”. Sin él, tanto jóvenes como adultos tienen pocas probabilidades de participar en los asuntos públicos. Sin embargo, según aumenta su interés, el comportamiento difiere en función del grupo de edad: mientras que entre los adultos aumenta la probabilidad de participar en política institucional (partidos políticos y elecciones), entre los jóvenes aumenta la probabilidad de participar en actividades no institucionales o de protesta (García-Albacete, 2014).

Así, frente a este panorama de desafección política, la juventud busca nuevas formas de involucrarse en la vida pública que pasan por el uso de las redes sociales, el compromiso con plataformas de participación ciudadana o en movimientos sociales⁸. Ejemplos como el movimiento “Fridays for Future” (liderado por jóvenes preocupados por el cambio climático), o el 15M (que surgió en 2011 como respuesta a la crisis económica y la corrupción política), han marcado un antes y un después en la forma en que los jóvenes se relacionan con la política, y son una clara muestra de que la juventud está lejos de ser apática.



En ese sentido, las redes sociales y las plataformas digitales han abierto un espacio en el que las nuevas generaciones pueden expresar sus preocupaciones, articular sus demandas, coordinar acciones colectivas y presionar a gobiernos e instituciones en favor de cambios en las políticas públicas⁹. Más recientemente, el uso de plataformas como Change.org u Osoigo ha demostrado que la participación en la toma de decisiones no necesariamente pasa por las urnas. Los jóvenes prefieren involucrarse en campañas sobre problemáticas concretas, que les permitan sentir que sus acciones tienen un impacto inmediato y tangible.

En paralelo, en los últimos años han surgido en España diferentes organizaciones orientadas al empoderamiento político juvenil. Talento para el Futuro¹⁰, Global Shapers (impulsada por el World Economic Forum)¹¹, Equipo Europa o Youth Economic Circle¹², por citar algunas, trabajan para crear puentes entre la juventud y las instituciones (incorporando también, en muchos casos, al sector empresarial); y empoderando a las nuevas generaciones para que sean partícipes de las grandes transformaciones que necesita nuestro país.

Con motivo de las últimas citas electorales también se han activado campañas como Polétika (promovida por 500 organizaciones y movimientos de la sociedad civil)¹³ o #ConVozyVoto (impulsada por Talento para el Futuro, Harmon y Political Watch)¹⁴ con el objetivo de obtener compromisos políticos concretos o reducir la abstención entre los jóvenes.

Estas formas alternativas de participación (a menudo informales, espontáneas, y organizadas desde fuera de las estructuras tradicionales) tienen gran poder de movilización. De hecho, muchas de las demandas surgidas de estos movimientos han sido incorporadas a la agenda política, demostrando que el activismo juvenil puede influir en la toma de decisiones. La participación de los jóvenes en estas plataformas no solo les otorga visibilidad, sino que también los empodera como agentes de cambio, reforzando su identidad y pertenencia a una comunidad comprometida.

Ley de Juventud

Ante este cambio de paradigma en la participación juvenil es fundamental que las instituciones reconozcan e integren estas transformaciones en sus procesos de toma de decisiones, creando mecanismos y espacios de participación adaptados a sus preferencias y necesidades. En ese sentido, el Gobierno de España ha iniciado un proceso para elaborar una nueva Ley de Juventud que pretende garantizar la inclusión de los jóvenes en la elaboración de las políticas públicas y fomentar el diálogo intergeneracional¹⁵.

El reto está en integrar las nuevas maneras de involucrarse en la vida pública en las estructuras tradicionales

La futura Ley de Juventud representa una oportunidad única para establecer un marco institucional que permita a los jóvenes participar de manera activa y efectiva en las decisiones que afectan a su futuro. Sin embargo, para que la norma sea verdaderamente transformadora, debe ir acompañada de un esfuerzo real por parte de las instituciones para abrirse a nuevas formas de participación y para reconstruir la confianza perdida. Es necesario mejorar la educación cívica y la promoción de la participación en los procesos electorales, así como fomentar la colaboración entre las instituciones y los movimientos juveniles, garantizando que las voces de los jóvenes sean escuchadas y consideradas en la formulación de las políticas públicas. Además, los partidos políticos deben adoptar un enfoque más inclusivo y representativo, incorporando a los jóvenes en sus estructuras, favoreciendo su presencia en puestos de decisión, y ofreciendo respuestas a sus inquietudes.

En un momento en que la política afronta una profunda crisis de confianza, y el apoyo a la democracia se encuentra en retroceso, los jóvenes pueden ser los motores de un cambio necesario. Para ello, es esencial que se les dé el espacio y las herramientas necesarias para participar en la construcción de un futuro mejor, tanto para ellos como para las generaciones que están por venir. Solo mediante un diálogo honesto y abierto entre generaciones podremos construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática.